

RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

Durante el mes de abril, se han producido dos hechos importantes que han caracterizado la situación política. Por una parte, la constitución de una nueva formación política, la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía, partido que se denomina de centro izquierda y que cuenta con 19 parlamentarios. Por otra, la controvertida resolución del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional determinados artículos del Reglamento por el que se regula la Agencia Nacional para la Integridad (ANI).

En el primer caso, la nueva formación política se ha constituido con los parlamentarios tráfugas del PSD y el PNL, que abandonaron sus respectivos partidos para engrosar el Grupo Independiente, dirigido por otro antiguo diputado del PSD y ahora Ministro de Defensa en el Gabinete de coalición liderado por el PDL, Gabriel Oprea. En este grupo se integraron personalidades destacadas como el ex Ministro de Trabajo y ex vice-presidente del PSD, Marian Sarbu, o el también ex Ministro de Asuntos Exteriores M. Diaconescu. Con posiciones políticas cercanas al presidente Traian Basescu, el nuevo partido es visto entre los opositores como una quinta columna creada por éste en la izquierda con el objetivo de ganar apoyos para el gubernamental Partido Democrático Liberal (PDL).

El segundo hecho importante, la declaración de inconstitucionalidad de determinados artículos del Reglamento de la ANI, ha arrojado una espesa sombra sobre los avances registrados en Rumanía en los últimos meses en la lucha contra la corrupción. La resolución supone de hecho un muy importante recorte de las prerrogativas de la Agencia, cuya actividad se ha convertido en un referente de la lucha contra la corrupción en Rumanía. Recientemente, permitió el procesamiento e ingreso en prisión preventiva del Senador del PSD, Catalin Voicu, primera personalidad de esta clase que va a parar a la cárcel en los últimos veinte años, y que ha arrastrado tras sí a un magistrado del Tribunal Supremo y dos conocidos empresarios. Debe recordarse (ver reseña informativa de marzo-2010) que la detención de Voicu se produjo después de el análisis de la Comisión Europea sobre el estancamiento y el escaso avance observado en la lucha contra la corrupción en Rumanía, y de alguna forma, vino a desmentir esta aseveración. La resolución del Tribunal Constitucional nos retrotrae al informe de la Comisión, haciéndole cobrar actualidad, razón por lo que ha sembrado la preocupación en medios periodísticos y diplomáticos de Bucarest. Las declaraciones del Presidente Traian Basescu, en el sentido de que la ANI tendrá de todas formas un reglamento que le permita actuar con la misma eficacia que hasta ahora, no deja de parecer un mero intento de tranquilizar a la opinión y a los socios europeos, pero sin mucha credibilidad por el momento.

Por lo que respecta a la actividad del Gobierno y el Parlamento, cabe decir que durante el mes de abril se ha continuado el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Reforma Educativa y de las Pensiones, y se han ultimado los pasos para presentar al Parlamento la nueva Ley retributiva de los empleados públicos. La relativa estabilidad del Gobierno de coalición apoyado en la UMRD y en los diputados de las minorías

étnicas y del Grupo Independiente (ahora ya la UNPR) ha permitido al Gobierno Boc ir sacando adelante los proyectos legislativos, aunque no por ello sin tener que enfrentarse a la oposición del PSD y PNL en el Parlamento y a las centrales sindicales en la calle y en la mesa del Diálogo Social.

Relacionado con la situación económica, que comentaremos más adelante, el PNL ha pedido de manera contundente la dimisión en bloque del Gobierno Boc, y su sustitución por un Gabinete de tecnócratas con un máximo de siete u ocho ministros. Crin Antonescu, líder del PNL ha rechazado por enésima vez la oferta de entrar en el Gobierno y ha optado por pedir su dimisión. El líder del PNL ha acusado al Ejecutivo de haber presentado la posibilidad de un incremento de los impuestos camuflándola como si se tratase de una exigencia del Fondo Monetario Internacional. El PSD, a su vez, ha anunciado la preparación de una moción de censura contra el Gobierno, pidiendo para esto el apoyo del PNL y una parte de la propia coalición gubernamental, el Partido de la Minoría Húngara (UMRD). El líder de esta última formación, el Vice-Primer Ministro Marko Bela, se ha apresurado a desmarcarse de esa posibilidad, insistiendo en que seguirá apoyando a la coalición. Los analistas políticos ven sin embargo en esta maniobra un indicio de que las relaciones entre UMRD y PDL no atraviesan su mejor momento, y calculan hasta qué punto el Partido de la Minoría Húngara estaría pensando en cerrar su etapa de colaboración gubernamental con una formación como el PDL, por naturaleza ajena a cualquier concepción descentralizadora del Estado.

Como resultado, los medios de comunicación han destacado en las últimas semanas la situación de desgaste político en que se encuentra el Gobierno Boc, tras apenas cuatro meses de existencia, acuciado por las consecuencias de la crisis, la lentitud en llevar a cabo las reformas legislativas exigidas por el FMI y la continua presión de dicha Institución. Por este motivo, se empieza a rumorear sobre la posibilidad de una crisis parcial de Gobierno. Mientras que para el diario "Romania Libera", entre los ministros a sustituir figurarían Mihai Seitan y Adrian Videanu, titulares de Trabajo y de Economía respectivamente (el primero por supuestas diferencias con el Primer Ministro en la concepción de la reforma de las pensiones, mientras que el segundo por su fracaso en la gestión de los Fondos Europeos).

Otro Diario importante, Adevarul, citando fuentes supuestamente solventes del PDL ha elaborado otra lista en la que figuran hasta 6 ministros, encabezada por el de Transportes, Radu Berceanu (a quien se reprocha su rotundo fracaso en acometer los proyectos de construcción de autopistas) seguido por los dos ministros antes citados y añadiendo a éstos los de Educación y Sanidad. Como se ve, se habla de los departamentos ministeriales que han sufrido un mayor desgaste y que han detectado un mayor fracaso en la aplicación de las políticas gubernamentales, pero que coinciden a su vez con los temas que generan una mayor preocupación en la sociedad rumana: Trabajo, Economía, Transportes, Educación y Sanidad. Frente a estos rumores, el propio Ministro de Economía, coincidiendo con el Vice-Primer Ministro, ha señalado que no es momento para crisis ministeriales, sino para consolidar un gobierno estable. Una idea que no han podido descartar los dos Ministros es la de que quizás ambas cosas puedan no ser contradictorias.

Situación económica

Por lo que respecta a la situación económica, el mes de abril ha estado presidido por la espera de la visita de la Misión del Fondo Monetario Internacional, al objeto de evaluar los avances en el cumplimiento de las condiciones acordadas para la concesión a Rumania el año pasado del préstamo de casi veinte mil millones de euros, del que aún queda por librar una parte significativa, consistente en unos 8.000 millones de euros.

El mes de abril continuó con una sucesión de análisis de fuente privada y gubernamental sobre las perspectivas de crecimiento y de recuperación de Rumanía (ver este mismo tema en la reseña de marzo-2010). Conocida la cifra final de 8% de déficit con que se ha cerrado el 2009, el FMI ha optado por revisar a la baja el pronóstico de crecimiento de 1,3% para el 2010 al 0,8%.

Entre otras opiniones significativas figura el informe de Moody's, que mantiene las previsiones negativas para Rumanía. Moody's ha analizado las tendencias de crédito y ha realizado un informe sobre las previsiones para los sistemas bancarios de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), los Países Bálticos y Europa del Este. El informe concluye que a corto plazo, Moody's probablemente mantendrá la perspectiva negativa para la mayoría de estos sistemas bancarios y, en concreto, para el sistema bancario de Rumanía. Otras previsiones, referidas al crecimiento económico en general, aunque reconocen la posibilidad de un despegue a partir del segundo semestre, coinciden en que la recuperación va a ser muy lenta.

Nada más llegar a Bucarest, el Jefe de la Misión del FMI, Jeffrey Franks, fue interpelado por los medios acerca de la posibilidad de una subida de los impuestos. Aunque el funcionario del FMI se apresuró a rechazar cualquier comentario sobre medida alguna de carácter fiscal antes de haber llegado a un acuerdo con las autoridades de Rumanía, la sola mención de esta posibilidad desató toda suerte de tensiones y rumores e incluso, (ver más arriba) una petición formal de dimisión del Gobierno por parte del PNL.

En la base del problema se haya el reconocimiento por parte del Gobierno de la dificultad, si no imposibilidad, de cumplir con las expectativas de contención del déficit público en una cifra no superior al 5,9 del PIB. ¿Los motivos? La caída de la tasa de ingresos motivada por el incumplimiento de las expectativas de recaudación, que no están cumpliendo, ni de lejos, las previsiones elaboradas meses atrás. En una entrevista concedida a "Money Chanel" el Jefe de la Misión del FMI reconoce que la situación de Rumanía desde el punto de vista fiscal es bastante más grave que la de hace unos meses. Un informe reciente de EU-ESA, señala que salvo que el Gobierno adopte medidas suplementarias, el déficit a final de año no bajará del 8,2%. La incapacidad para recaudar con eficacia el IVA y otros impuestos, la generalización del fraude fiscal, así como la imposibilidad de cobrar las deudas tributarias de grandes empresas como ROMPETROL, unido a la incapacidad demostrada de captar los fondos comunitarios asignados a Rumanía, (hecho que parece haber acabado irritando al FMI) harían casi imposible alcanzar un nivel de recaudación suficiente para cumplir las previsiones.

Aun cuando la Misión del FMI decidió prolongar su estancia en Bucarest, e informó que no sería sino hasta el final que publicaría sus conclusiones, los medios de comunicación se entretuvieron en describir varios escenarios en los que podía situarse la negociación. Las opciones, al final, no podían ser sino dos: mayor restricción del Gasto o incremento de los ingresos a través de la subida de los impuestos. En el primer caso, se señaló que en el Presupuesto del Estado, el 60% del Gasto se destina ya a gastos sociales, con lo que una mayor restricción del mismo implicaría mayores sacrificios para la población con menos recursos. Como segunda opción, se barajaba la posibilidad de incrementar el porcentaje del IVA al 22% (actualmente un 19%) y el impuesto sobre la propiedad a un 20% (que hoy es de un 16%). Tras una entrevista en el Palacio de Cotroceni entre el Presidente Basescu y el Gobernador del Banco Nacional, Mugur Isarescu, se filtró que se había considerado la posibilidad de llegar hasta el 24 % en el incremento del IVA.

Tanto el Banco Nacional como varios miembros del Gobierno, se han opuesto a la subida de los impuestos, habida cuenta de que ello supondría un lastre intolerable para la recuperación económica y podría disparar la tasa de inflación. Otro argumento subyacente, aunque nadie en el Gobierno lo enunciaría tan claramente, es que probablemente en un país en el que la economía sumergida alcanza el 30 % del PIB según cifras oficiales (los sindicatos han señalado que muy posiblemente la cifra llegue a un 40 o un 45%) una medida fiscal de este calibre no haría sino aumentar la actividad económica y el empleo irregular. Recuérdese que Rumanía ya tiene una tasa de actividad muy baja, del 63,9%, y una tasa de ocupación del 58%. Los sindicatos también se opusieron tajantemente a la subida de los impuestos. Las cinco centrales sindicales más importantes señalaron que una subida de los tributos, sin haber adoptado antes un sistema de tributación progresivo, golpearía a las economías más débiles, sembraría el desconcierto en la población y reduciría drásticamente su capacidad adquisitiva, acercando a las clases medias y sobre todo a los trabajadores al umbral de la pobreza.

La patronal, por su parte, clamó que unas medidas fiscales tan drásticas sólo conseguirían volver a castigar al sector privado que, a su parecer, ya ha pagado su cuota de contribución a la recuperación económica en forma de incontables sacrificios.

Ante esta situación, quedó la impresión de que sólo una reducción del Gasto puede tener un efecto positivo. El problema es que el Gobierno ha venido hablando de esto mismo desde hace más de un año, anunciando y aplicando una medida tras otra, pero sin haber adoptado una sola que esté realmente a la altura del problema, por más que la población no ha dejado de sufrir las consecuencias de la política de austeridad. Recuérdese los temas aún sin resolver en la Mesa del Diálogo Social, como la semana de vacaciones no pagadas impuestas a los empleados públicos como medida de emergencia el año pasado.

Haya sido o no un objetivo buscado, lo cierto es que la tormenta desatada por el anuncio de la posibilidad de una subida drástica de los impuestos, ha permitido al Gobierno pasar a considerar directamente la única alternativa posible, es decir, medidas de contención del Gasto aún más drásticas.

Terminadas las conversaciones con la Misión del FMI, el Presidente de Rumanía, Traian Basescu, apareció ante las cámaras de TV para anunciar el acuerdo adoptado, y que consiste en una reducción de un 15% en el importe de las pensiones y las prestaciones por desempleo, y de un 25 % en los salarios de los empleados públicos, amén de otras drásticas reducciones de las prestaciones sociales, y que todo ello se empezará a aplicar no más tarde del próximo mes de junio.

En su aparición ante las cámaras, Basescu señaló que las dos opciones manejadas en la negociación habían oscilado entre desconfiar de la capacidad del Gobierno para llevar a cabo las reducciones del Gasto público, lo que llevaría invariablemente a un incremento de los tributos, o seguir confiando en el Gobierno y en su habilidad para redistribuir y reestructurar el Presupuesto. En ambos casos, señaló, habría sido necesario acometer recortes salariales en el Sector público. Seguirán otras medidas, de restricción del Gasto que afectarán fundamentalmente a los costes sociales, como la reducción de las prestaciones por desempleo (aunque en la actualidad, solo un 65% de los parados registrados están cobrando prestaciones) la reducción en un 20% del Fondo salarial del Sector Público y la anunciada reducción drástica del propio sector en un 10% antes del 2011, que supondría la amortización de unos 140.000 puestos de trabajo.

Si las especulaciones sobre el incremento de los tributos llegaron a provocar situaciones de auténtica histeria en los medios de comunicación, ahora habrá que esperar a ver las reacciones de la población que va a verse afectada por las nuevas medidas: unos cinco millones y medio de pensionistas, muchos de los cuales ya cobran pensiones por debajo del nivel de supervivencia y en torno al millón y medio de empleados públicos repartidos entre la Administración y las empresas estatales. Ambos colectivos se encontraban ya amenazados por los proyectos de reforma de las pensiones y de las retribuciones del Sector público. Los funcionarios habían anunciado una huelga general para conseguir que los salarios al menos no se depreciaran respecto al nivel del 2009. Los representantes de los pensionistas se habían enzarzado en una agria discusión sobre el procedimiento del cálculo del valor del punto para establecer la cuantía de la renta de cada pensión. Los profesores de Primaria y Enseñanza Media protagonizaron recientemente movilizaciones por no haber percibido salarios devengados y no pagados. Los médicos de familia del Sistema público fueron también a una huelga consistente en negarse a expedir recetas y volantes para acudir al especialista, sólo para que se mantuviese su poder adquisitivo. ¿Qué pasará ahora en que de repente éste se va a reducir en un 25% para los que estén en edad activa y en un 15% para los jubilados? Los sindicatos, que son los únicos que podrían plantarle cara seriamente al Gobierno, parecen haberse vuelto incapaces de deshacer semejante nudo gordiano, ya que ellos mismos se pronunciaron en contra de la subida de impuestos, y una reforma fiscal apresurada, implantando un sistema progresivo, que era la única posibilidad que haría aceptable dicha medida, es algo que los economistas y las autoridades del Banco Nacional, e incluso el FMI, consideran impensable en la presente situación, al menos hasta que la economía no haya conseguido recuperarse.

Situación social

Si hacemos un análisis de la aplicación de medidas anticrisis por el Gobierno durante casi todo el 2009 y lo que va del año en curso, observamos dos notas a destacar. De una parte, las dificultades de orden jurídico con que ha tropezado prácticamente cada una de las reformas que ha intentado el Gobierno. Varios proyectos han sido rechazados por el Tribunal Constitucional, y otros han sido duramente atacados en el trámite parlamentario o ha sido imposible llevar adelante debido a crisis de orden político. Los jueces y magistrados, a quienes afectará igualmente la reducción del 25% de sus ingresos, ya han advertido sobre la presunta ilegalidad de una medida semejante. En cualquier caso, es de prever que cualquier medida de esta clase, y más aún teniendo semejante alcance, va a ser fuertemente contestada en el Parlamento, lo que vuelve bastante improbable que se pueda aplicar en el mes de junio.

De otra parte, es menester considerar la eficacia de una contracción semejante del Gasto Público para nivelar el Presupuesto. Varios analistas ya han advertido de los efectos adversos que puede tener, sobre todo, para mantener el nivel de ingresos del Estado. Semejante recorte en la capacidad adquisitiva de una parte tan numerosa e importante de la población sólo puede llevar a una reducción de los ingresos por tributos y también a la consiguiente contracción del consumo, que a la larga producirá idéntico efecto.

Por todo ello, cada vez comienza a cobrar mayor realidad la impresión de que el Gobierno Boc se está viendo superado constantemente por la situación y que no consigue llegar a tiempo con sus reformas. El ex ministro Ilie Serbanescu ha declarado nada más conocer la decisión del Gobierno que las medidas para reducir el Gasto le parecen necesarias, pero que en cualquier caso no van a ser suficientes, y que inevitablemente deberán ir acompañadas por medidas fiscales. En una palabra, que, a pesar de todo, tarde o temprano, el Gobierno no va a tener más remedio que subir los impuestos.

Entre tanto, muchas otras informaciones contribuyen a sembrar la incertidumbre sobre el futuro de Rumanía. La utilización de los fondos europeos, la situación de la Administración Local, el panorama de las inversiones exteriores o el desarrollo del Turismo como fuente de ingresos, acapara noticias en los medios que resultan, cuanto menos, contradictorias.

Rumanía sigue demostrando una preocupante incapacidad en saber utilizar los recursos de que dispone, particularmente los Fondos comunitarios. Recientemente, El Ministro de Transportes, Radu Berceanu, declaró que no dispone de dinero para finalizar ni siquiera un solo kilómetro de autopista en 2010, a pesar de que el Ministerio ha asignado 720 millones de euros para autopistas del presupuesto total de 2.600 millones de euros. Al parecer, esta situación se debe al hecho de que aún no se han liquidado las obras realizadas por los constructores en 2009. La Compañía Nacional de Autopistas y Carreteras Nacionales de Rumanía (CNADNR) sostiene que necesita una cantidad total de 5.000 millones de euros para poder finalizar los proyectos en curso, mientras que el presupuesto para inversiones en 2010 es de 1.250 millones de euros.

El Gobierno anunció recientemente la necesidad de aprobar una Ley sobre bancarrota de las Haciendas Locales, ya que según fuentes del Ministerio del Interior, tres cuartas partes de los municipios de Rumanía se ven incapaces de pagar a sus proveedores y a sus trabajadores. Muchos de los proyectos financiados por fondos europeos se ven así abocados al fracaso, pues en su mayoría se ejecutan a nivel local y deben ser sostenidos por los ayuntamientos.

En el ámbito de la inversión privada, se calcula que un número creciente de Pymes de los países de Europa occidental han decidido reubicar sus negocios fuera de Rumanía, después de enfrentarse a la burocracia, la corrupción y las pobres infraestructuras rumanas. Es el caso de los agricultores de Europa occidental, que acudieron a Rumanía en busca de grandes áreas de cultivo a un bajo precio y que se han visto frenados por la necesidad de sobornar a las autoridades y a los funcionarios locales para cumplimentar todo el papeleo necesario.

Los españoles de THR Asesores en Turismo, Hostelería y Recreación que están creando la imagen turística de Rumanía afirman que los turistas alemanes, rusos e ingleses que visitaron Rumanía no volverían y tampoco recomendarían el país a otras personas, según una investigación realizada por la empresa. La investigación costó casi 400.000 euros e incluyó un sondeo i detallado, en profundidad y una investigación cuantitativa (10.800 entrevistas por teléfono), con el propósito de establecer la percepción de los turistas extranjeros sobre Rumanía. Joern Gieschen, el director de THR International, ha declarado que según el estudio de los 1.707 turistas que visitaron al menos una vez Rumanía, el 56% están dispuestos a volver y lo recomienda a otros, es decir, los turistas húngaros. Otro 12% de los turistas (americanos y franceses) no quieren volver, pero recomendarían el destino; mientras que otro 30%, principalmente los alemanes, ingleses y rusos, sostienen que no volverán y tampoco lo recomendarán.

Esta aparente incapacidad para gestionar la vida pública y privada contrasta con la probada capacidad de organización y de aprovechamiento de los recursos disponibles (a veces muy escasos) para buscar oportunidades de negocio que desarrollan los rumanos cuando atraviesan sus fronteras. En España, a pesar de que la crisis ha golpeado sin misericordia los colectivos de inmigrantes rumanos, elevando su tasa de desempleo muy por encima de la de la población autóctona, los datos del Padrón de enero del 2010 registran un aumento de 30.000 personas de nacionalidad rumana empadronadas respecto al mismo mes del año anterior. Esto ha hecho que los rumanos, con más de 800.000 residentes empadronados vuelva a situarse como la primera comunidad extranjera, superando nuevamente a los marroquíes. Es decir, que a pesar de la crisis, el desempleo y las dificultades, los rumanos se las están arreglando en España para sobrevivir, en lugar de producirse el retorno más o menos masivo que se esperaba.

En Italia, CGIA Mestre, una asociación de pequeños empresarios del norte de Italia, ha publicado que el número de compañías establecidas por nacionales del país balcánico se ha triplicado en el periodo del 2005 al 2009. A pesar de la crisis económica sufrida durante los últimos dos años, los negocios de los rumanos en Italia continúan aumentando. CGIA informa que a finales de 2009 había en Italia un total de 49.854 empresas rumanas. En lo que a número se refiere, los rumanos son los europeos más emprendedores de

Italia y sólo son superados por los marroquíes y los chinos. Las empresas rumanas están centradas sobre todo en la parte norte del país: Lombardía (19%), Piamonte (18,7%), Lazio (16,7%) y Véneto (15,8%).

Es decir, que parece quedar plenamente demostrada la capacidad organizativa y emprendedora de los rumanos. Sobre todo, cuando salen de su país

Algunos datos sobre población y pensiones.:

Población activa:	10.008.000
Población inactiva	9.247.700
Tasa de actividad	63,9%
Población ocupada o en búsqueda de empleo:	6.395.112
Población en demanda de empleo	765.300
Pensionistas:	5.521.500
Del sistema publico de pensiones	4.765.800
De la agricultura (con cargo al Presupuesto del Estado)	755.700
Importe medio de la pensión	677 lei (170 €)
Del sistema público	736 lei (184 €)
De la agricultura	308 lei (77 €)

Fuente: Ministeriul Muncii, Familia si Protectia Sociale y Encuesta de Población Activa

Las cantidades cifradas son brutas. La diferencia entre la población activa (varones y mujeres entre los 16 y los 65 años y 62 años respectivamente) y la inactiva (el resto de población) no arroja automáticamente la cifra de población ocupada, aunque algunas estadísticas oficiales así lo reflejan, lo que induce a confusión. Es necesario aplicar primero la tasa de actividad, que es la cifra de personas que, o están trabajando o están registrados como demandantes de empleo, perciban o no prestaciones. Rumania tiene una de las tasas de actividad más bajas de Europa, por debajo del porcentaje mínimo (70%) establecido en la Estrategia de Lisboa, lo que explica la gran diferencia entre la cifra de población activa y población ocupada: 2.852.588 personas que encontrándose en edad activa para trabajar, supuestamente no están trabajando ni tampoco buscando empleo. Esta cifra estaría englobada, en principio, por estudiantes, jóvenes a la búsqueda de su primer empleo pero que no se han registrado como demandantes en la ANOFM, amas de casa, trabajadores en prácticas que no perciben remuneración, población rural que sobrevive practicando una economía más o menos autárquica, población marginal y, finalmente, trabajadores por cuenta propia o ajena no declarados.

Respecto a las cifras de pensiones, es necesario distinguir entre las del sistema público y las de la agricultura. Estas últimas corresponden a aquellas personas que trabajaron en granjas colectivizadas por el Estado hasta 1989. En el 2006, estas pensiones se empezaron a contabilizar fuera del sistema público en un intento de reducir el déficit del mismo. Actualmente, se pagan con cargo al presupuesto del Estado.